



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicado: 05001-31-05-021-2020-00281-01
Demandantes: David Gómez Valencia, Jhon Dairo Gómez Cañas y
Luz Amparo Valencia Vargas
Demandadas: Saitemp S.A. y Dyna y Cía. S.A.
Garantía: Seguros Generales Suramericana S.A.
Asunto: Apelación de Auto
Procedencia: Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Llamamiento en garantía

Medellín, mayo dieciséis (16) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por Seguros Generales Suramericana S.A., contra el auto el proferido el 27 de septiembre de 2022 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por David Gómez Valencia, Jhon Dairo Gómez Cañas y Luz Amparo Valencia Vargas contra Saitemp S.A. y Dyna y Cía. S.A., y en el que se llamó en garantía a Seguros Generales Suramericana S.A., conocido con el Radicado 05001-21-05-021-2020-0281-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

Los señores David Gómez Valencia, en calidad de víctima directa, y Jhon Dairo Gómez Cañas, y Luz Amparo Valencia Vargas, en su condición de padres y víctimas indirectas, formularon demanda ordinaria laboral en procura de que se declare que las sociedades Saitemp S.A., como empleadora, y Dyna y Cía. S.A., como beneficiaria de la obra, son solidariamente responsables del reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios materiales, morales, fisiológicos y/o estéticos derivados del accidente de trabajo acontecido el 28 de junio de 2016. (doc.12, carp.01)

1.2.- CONTESTACIÓN

La sociedad **SAITEMP S.A.**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, formulando como excepciones de mérito las que denominó falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones reclamadas; buena fe de Saitemp; mala fe de los demandantes; prescripción; compensación; régimen de responsabilidad y carga de la prueba; culpa de la víctima; y ausencia de daño moral (págs.03-13, doc.15, carp.01).

Adicionalmente, llamó en garantía a la compañía Seguros Generales Suramericana S.A., para que, en virtud del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual celebrado con la misma, sufrague las acreencias reclamadas por los demandantes, en caso de que se disponga el reconocimiento de las mismas (págs.52-55, doc.15, carp.01).

Por su parte, la empresa **DYNA Y CÍA. S.A.**, también formuló oposición contra prosperidad de las pretensiones, y de fondo excepcionó la prescripción; mala fe;

inexistencia de las obligaciones; responsabilidad del trabajador en el accidente de trabajo; y compensación de culpas (doc.16, carp.01).

Finalmente, la compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, se opuso a las pretensiones incoadas tanto en la demanda principal como en el llamamiento en garantía, excepcionando, respecto de la primera, la inexistencia de causa petendi; inexistencia de culpa del empleador; prescripción de las indemnizaciones solicitadas; y buena fe; y respecto del segundo, sujeción al contrato de seguro; inexistencia de cobertura; y prescripción (doc.20, carp.01).

Adicionalmente, llamó en garantía a la empresa Dyna Y Cía. S.A., para que le reembolse las sumas a las que fuera condenada, y asuma los costos del presente proceso, por ser la responsable de capacitar, instruir y suministrarle al señor David Gómez Valencia los elementos de seguridad idóneos para la realización de la actividad en cuya ejecución presuntamente sufrió el accidente trabajo que fundamentan las pretensiones incoadas (doc.21, carp.01).

1.3.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 27 de septiembre de 2022, rechazó el llamamiento en garantía formulado por Seguros Generales Suramericana S.A. contra Dyna Y Cía. S.A., arguyendo que la subrogación pretendida escapa de la esfera de la jurisdicción ordinaria laboral (doc.22, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

El poderhabiente judicial de Seguros Generales Suramericana S.A., impetró los recursos de reposición y en subsidio apelación, encaminados a la admisión del llamamiento en garantía formulado, aliviando que la acción de subrogación o derecho de repetición del asegurador respecto del responsable del hecho dañoso resulta legalmente admisible, como llamamiento en garantía dentro del proceso de la referencia, conforme a lo establecido en el artículo 1096 del Código de

Comercio y los artículos 64 y 65 del Código General del Proceso, rindiéndole tributo al principio de la economía procesal, puesto que se evita una nueva Litis para ejercer el llamado derecho de regresión o de reversión, entre quien sufrió la condena y la persona legal o contractualmente obligada a correr con sus consecuencias patrimoniales.

Adicionalmente, arguyó que si se admitiera que el Juez Laboral no tuviera competencia para pronunciarse sobre las de controversias que se derivaran del contrato de seguro, su clausulado y el marco legal, tampoco debió admitirse el llamamiento en garantía formulado por Saitemp S.A. en contra de su representada (doc.23, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Finalmente, se advierte que, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, ninguno de los extremos litigiosos presentó alegatos de conclusión.

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

2.2.- PROBLEMA JURÍDICO

Debe determinar la Sala:

¿Si a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad del trabajo y la seguridad social, le asiste competencia para conocer de las controversias referidas a la subrogación

que de la aseguradora que garantizó el cubrimiento del riesgo, respecto del responsable del siniestro?

2.3.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual la subrogación pretendida a través del llamamiento en garantía formulado por Seguros Generales Suramericana S.A. se cimienta en la eventual responsabilidad civil de la codemandada Dyna Y Cía. S.A, en la ocurrencia del siniestro, que le permitiría a la aseguradora repetir en su contra el valor de la indemnización pagada, no existiendo una obligación previa de garantía a cargo de esta última en favor de la aseguradora, propia de la pretensión “in reverso” o “de reembolso” y en esa medida, el llamamiento en garantía escapa de la competencia asignada a la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual el auto confutado será CONFIRMADO.

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 64 del Código General del Proceso establece:

“ARTÍCULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó:

“El llamamiento en garantía es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, existe una relación legal o contractual de garantía que lo obliga a indemnizarle al citante el ‘perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia’

que se dicte en el proceso que genera el llamamiento” (GJ CLII, primera parte N°. 2393, pág. SC del 14 oct. 1976).

Y refrendando esa posición, en fecha más reciente explicó:

“Por tal razón, la Corte ha sostenido que “El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago” (CSJ SC1304-2018)

Tesis que ha sido acogida por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, quien refiriéndose al tema refirió:

“... la homóloga Civil, por ejemplo, al explicar con profusión la figura del llamamiento en garantía, señaló que tal mecanismo es ‘...una especie de intervención coactiva a instancia de parte que se funda en el vínculo de garantía que une al tercero garantizador llamado en causa, con el garantizado, llamador en causa. Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término “garantía”, esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante” (CSJ SL5031-2019).

Ahora, el artículo 1096 del Código de Comercio prevé:

*“ARTÍCULO 1096. SUBROGACIÓN DEL ASEGURADOR QUE PAGA LA INDEMNIZACIÓN. El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en **los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro**. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.*

Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada” (negrilla de la Sala)

Así las cosas, se colige que la acción subrogatoria requiere que se acredite (i) la existencia de un *contrato de seguro*, (ii) la ocurrencia del *siniestro* amparado, y (iii) y la materialización efectiva del *pago de la indemnización*; de manera que, por mandato de la normativa en cita, la aseguradora se subroga en los derechos de quien resultó afectado patrimonialmente con el riesgo amparado, pasando a ocupar su lugar o posición en la relación jurídica existente con el *responsable o causante del hecho dañoso*, imponiéndose como cuarto requisito, (iv) la responsabilidad civil contractual o extracontractual del accionado en la causación del siniestro

Respecto al tema, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, precisó:

“El artículo 1096 del Código de Comercio dispone que ‘el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro’. Como puede verse, este precepto reclama la existencia de un soporte básico, cuál es el pago de una indemnización por parte del asegurador, a raíz de una póliza de seguro previamente expedida; consecuentemente, la compañía se subroga - ipso iure - en los derechos del asegurado, de modo que entra a ocupar la posición que éste tenía dentro de la relación jurídica respectiva, que no se extingue por tal razón, asumiendo la titularidad de todos los créditos, garantías y acciones con que contaba su antecesor, frente a los causantes del siniestro” (CSJ SC del 08/11/2005, radicado 7724).

Asimismo, respecto a la acción subrogatoria, se sostuvo:

“La acción personal subrogatoria consagrada en la legislación colombiana en el artículo 1096 del estatuto comercial, no obstante sus particularidades, se encuentra íntima y funcionalmente enlazada con la institución de la subrogación disciplinada por el ordenamiento civil, al punto que los fundamentos y los postulados medulares que le sirven de apoyatura en este específico régimen, en general, son los que informan la figura en la esfera mercantil, corolario del acerado principio indemnizatorio que, con tanto abínco, campea en los seguros de daños -a diferencia de los de personas -, según explícita y autorizada mención ex lege, así como la realizada en la exposición de motivos del proyecto de Código de Comercio (artículos 914-916).

Desde esta perspectiva, resulta claro el origen y el carácter del derecho radicado en cabeza del asegurador, en virtud de la aludida subrogación personal, derecho que es derivado (...), como lo reconoce autorizada doctrina sobre la materia y, por tal motivo, ayuno de sustantividad y autonomía, como quiera que la entidad aseguradora - he ahí la importancia del fenómeno sustitutivo que aflora de la subrogación -, adquiere el mismo derecho que antes del pago residía en la órbita patrimonial del asegurado-damnificado.

Con otras palabras, aunque la acción subrogatoria tiene su manantial en el pago que el asegurador le hace al asegurado-beneficiario en cumplimiento de la obligación que contrajo en virtud del contrato de seguro, el derecho que aquel ejerce al amparo de la referida acción frente a las ‘... personas responsables del siniestro’, no nace o deriva de la relación aseguraticia - a la que le es completamente ajena -, sino que procede de la conducta antijurídica desplegada por el victimario, autor del daño que afectó al damnificado asegurado, según el caso. Por tanto, el pago de éste tan sólo determina su legitimación en la causa para el ejercicio de la señalada acción, así como la medida del derecho que puede reclamar, pero no la naturaleza del derecho mismo, ni sus propiedades, pues éste no es otro distinto del que tenía la víctima antes de ser indemnizada por el asegurador.

Ello explica por qué ‘el derecho adquirido por el asegurador, en virtud de la subrogación, es un derecho derivado del que tenía el asegurado frente al tercero. Dicho, en otros términos, la acción que ejerce el asegurador contra el tercero es la misma acción que tiene el asegurado contra el autor del daño. Por esta razón gozará de todos los beneficios que esta acción tuviera y, al contrario, quedará sometida a las mismas excepciones que podrían ser opuestas al asegurado’ (...), lo que es apenas obvio si se tiene en cuenta que ‘su derecho se moldea (...) sobre el del asegurado’ y, por consiguiente - esto es nuclear -, tiene la ‘misma naturaleza y la misma extensión’, de suerte que tendrá ‘por base una responsabilidad contractual o una responsabilidad delictual, sin que el asegurador pueda modificar esa base’ (...)” (CSJ SC del 18/05/2005, radicado 0832-01).

Y más recientemente la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, precisó:

“Aunque del texto del artículo 1096 mercantil aparentemente dimana un único requisito para el buen suceso de las pretensiones del asegurador, consistente en que hubiere efectuado el pago de la indemnización, la doctrina, con apego a la noción en que descansa la figura, han destacado que es necesario acreditar los siguientes requisitos: a) La existencia de un contrato de seguro; b) el pago válido en virtud a ese convenio; c) que el daño ocasionado por el tercero sea de los amparados por la póliza y d) que acaecido el siniestro nazca para la compañía aseguradora una acción contra el responsable.” (sentencia SC11822-2015 del 03 de septiembre del 2015. M.P. Ariel Salazar Ramírez)

2.5. CASO CONCRETO

Ahora bien, se destaca que en el plenario obra la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No.0547329-6, expedida el 25 de abril de 2018 por la compañía Seguros General de Suramericana S.A., la cual fue tomada por la sociedad Saitemp S.A., como tomadora y asegurada, en favor de los terceros afectados, como beneficiarios, y cuya vigencia fue prorrogada hasta el 26 de abril de 2020, en procura de garantizar la responsabilidad en la que pudiera incurrir en su calidad de empleadora, respecto de “... *los accidentes de trabajo que por su culpa, sufran sus empleados, y los accidentes de trabajo de sus contratistas y subcontratistas cuando exista responsabilidad solidaria de su parte*”. (págs.35-50, doc.20, carp.01).

De lo hasta aquí planteado, se colige que le asiste razón al cognoscente de primer grado, al razonar que el asunto a debatir en virtud del llamamiento en garantía formulado por Seguros General de Suramericana S.A., en contra de la sociedad Dyna Y Cía. S.A, en principio autorizado por el artículo 65 del CGP, cuyo inciso final establece “*El convocado podrá a su vez llamar en garantía*”, escapa la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, pues la subrogación pretendida no tiene como fuente una obligación de garantía propia de la pretensión “in reverso” o “de reembolso” y el pago total o parcial que tuviere que hacer Seguros General de Suramericana S.A., como resultado de la sentencia, es consecuencia directa del riesgo asegurado y por el cual el tomador pagó la respectiva prima.

De ahí que lo que la ley y el contrato le autorizan a la aseguradora es que, una vez hecho el pago, pueda subrogarse en la acción que hubiera tenido el asegurado, en este caso en la sociedad Saitemp S.A. en contra de Dyna Y Cía. S.A y ello supone la discusión de la responsabilidad civil de esta última en la causación del siniestro; en este contexto, la causa que da origen a la subrogación no deriva de una obligación indemnizatoria previa existente entre la sociedad Dyna Y Cía. S.A y Seguros General de Suramericana S.A., sino de la eventual responsabilidad civil del asegurado en la ocurrencia del siniestro, presupuesto *sine qua non* para que pueda dirimirse el conflicto en la esfera del llamamiento en garantía.

Así las cosas, de la cláusula general de competencia, contenida en los artículos 15 y 20 (numeral 11) del Código General del Proceso, se infiere que la competencia para conocer de la controversia relativa a la responsabilidad civil de Dyna Y Cía. S.A en la ocurrencia del siniestro, es de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, una vez en firme la sentencia que establezca una condena al tomador del seguro Saitemp S.A respecto del cual la aseguradora pretende subrogarse.

Sumado a ello, existe otra razón que también torna improcedente el llamamiento en estudio, como lo es que el hecho habilitante de la subrogación lo constituye el pago válido de la indemnización y mientras no ocurra el mismo no nace la acción subrogatoria.

En esta perspectiva, Seguros Generales Suramericana S.A. no podría tener más derechos de los que tendría la parte en quien pretende subrogarse y en este caso, es claro que mientras no se declare el derecho y se emita decisión en favor de los demandantes, y en contra de la sociedad Saitemp S.A. y se desembolse el respectivo pago, ésta no tiene acción alguna en contra de Dyna Y Cía. S.A, y por ende tampoco la tiene la aseguradora apelante.

En glosa de lo anterior, lo procedente será confirmar la decisión de primera instancia. Costas en esta instancia a cargo de Seguros Generales Suramericana S.A.; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 que corresponde un (1) SMLMV.

3.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín:

RESUELVE


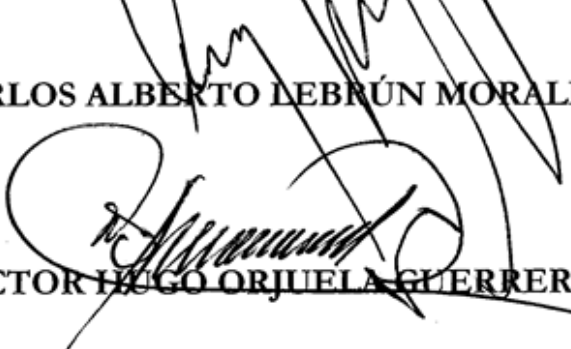

1.- Se **CONFIRMA** el auto proferido el 27 de setiembre de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por David Gómez Valencia, Jhon Dairo Gómez Cañas y Luz Amparo Valencia Vargas contra Saitemp S.A. y Dyna y Cía. S.A., y en el que se llamó en garantía a Seguros Generales Suramericana S.A.

2.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Edgar Darío Jaramillo Duque; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado en los Estado N° 083 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 17 de mayo de 2023

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario